

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 27º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-34333-2018  
CARATULADO : CÁCERES/FISCO DE CHILE, CONSEJO DE  
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, ocho de Junio de dos mil veintitrés

**VISTOS:**

En causa **Rol C-34.333-2018**, por presentación de fecha 03 de noviembre de 2018, comparece don Omar Fernando Cabrera Cabezas, abogado, domiciliado en Pasaje Doctor Sotero del Rio N° 326, oficina 409, comuna y ciudad de Santiago, quien en representación convencional de: **1) don JORGE TIBURCIO CÁCERES GARÍN**, empleado; **2) don MANUEL JESÚS PINOCHET SALAZAR**, empleado; **3) don LUIS ALBERTO SILVA MELLADO**, empleado; **4) don ROBERTO ENRIQUE POZO RIVEROS**, empleado; **5) don MANUEL RENÉ PARADA SALDÍAS**, empleado; **6) don PEDRO ALEJANDRO MUÑOZ MIRANDA**, empleado; y **7) don GERMÁN LUIS PARRA MARDONES**, empleado, todos domiciliados en Avenida José Manuel Irarrázaval N° 0394, comuna de Puente Alto, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, quien deduce **demanda en procedimiento ordinario de mayor cuantía de indemnización de perjuicios (Juicio de Hacienda)** en contra del **FISCO DE CHILE**, representado -en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por doña **MARIA EUGENIA MANAUD TAPIA**, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1687, edificio Plazuela de Las Agustinas o por quien sus derechos represente, a objeto que, en virtud de los antecedentes de hecho y derecho que esgrime, sea acogida en todas sus partes, y en definitiva, se condene al demandado a pagar a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las víctimas de torturas provocadas por Órganos del Estado de Chile, **la suma de \$200.000.000.- (doscientos millones de pesos) a cada uno de los demandantes**, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho, equidad y al mérito de autos; todo con costas.

En folio 5, consta que con fecha 20 de diciembre de 2018, se notificó personalmente a doña Maria Eugenia Manaud Tapia, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, en



representación del demandado Fisco de Chile, de la acción deducida en autos.

En folio 6, se presenta doña Ruth Israel López, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado por el Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, quien **contestando la demanda**, solicita el total rechazo de las acciones deducidas en su contra, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que expone, oponiendo, en primer lugar, la excepción de reparación integral, improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante, y en segundo lugar, opone la excepción de prescripción extintiva de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil y en **subsidio**, en caso que el tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil; y **en subsidio de las defensas y excepciones precedentes**, opone las alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y los montos pretendidos, refiriéndose a la fijación de la indemnización por daño moral y luego a la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada. En subsidio, de lo anterior, solicita rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

En folio 11, la demandante evacúa el trámite de **Réplica**.

En folio 13, la demandada evacua el trámite de **Dúplica**.

En folio 18, se **recibió la causa a prueba**, fijándose al efecto los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, rindiéndose por las partes la prueba documental y testimonial que obra en autos.

En folio 52, se **citó a las partes para oír sentencia**.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.-** Que, en estos autos ha comparecido don Omar Fernando Cabrera Cabezas, abogado, en representación de Jorge Tiburcio Cáceres Garín, Manuel Jesús Pinochet Salazar, Luis Alberto Silva Mellado, Roberto Enrique Pozo Riveros, Manuel René Parada Saldías, Pedro Alejandro Muñoz Miranda y Germán Luis Parra Mardones, e interpone demanda en procedimiento ordinario de mayor cuantía de indemnización de perjuicios (Juicio de Hacienda) en contra del Fisco de Chile, representado -en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por doña Maria Eugenia Manaud Tapia, abogado, a objeto que, en definitiva, se condene al demandado a pagar a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las víctimas de torturas provocadas por Órganos del Estado de Chile, la suma de \$ 200.000.000.- (doscientos millones de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CMNXXFFXRQT

pesos) a cada uno de los demandantes, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho, equidad y al mérito de autos; todo con costas.

Funda su libelo expresando en cuanto a los Hechos que, los aciagos hechos descritos que se describirán han sido reconocidos voluntariamente por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, a través de un proceso colegiado de evaluación de los antecedentes de cada caso en particular, dirigido a la identificación de elementos de juicio objetivos, que permitieran formarse convicción moral sobre dicha condición.

Revela que cada caso y cada detención fue objeto de un riguroso proceso de análisis que comprendió la validación de la información proporcionada por los declarantes por medio de investigación documental, antecedentes provenientes de organismos públicos, referencias de organismos de derechos humanos, de organizaciones de víctimas, información de testigos calificados, investigaciones en bases de datos disponibles y, en un número significativo de casos, mediante una segunda entrevista a la víctima o a testigos. Se expone sobre la metodología de trabajo adoptada por la referida Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Prosigue exponiendo los relatos de cada uno de los demandantes y que dicen estricta relación con los hechos que fundamentan la demanda y que fueron vividos por ellos por el actuar deleznable de muchos agentes del Estado de Chile.

**1.- JORGE TIBURCIO CÁCERES GARÍN**, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura de Chile N° 3.905. Fue detenido el 11 de septiembre del año 1973, cuando fuerzas militares allanaron la fábrica donde trabajaba (maestranza Gemo). Lo pusieron junto a sus compañeros en el suelo boca abajo, brindándoles golpes de culatazos, los escuadrones pasaban sobre sus cuerpos. Luego los suben a camiones militares para llevarlos hasta el Estadio Chile, en todo momento a punta de golpes y amenazas, panorama que se repite durante su estadía en el recinto, hasta el 15 de septiembre, pues lo trasladan al Estadio Nacional. En este lugar lo interrogan en dos oportunidades en el velódromo, le cubren la cabeza y propiciándole múltiples golpes le pedían que entregara nombres de personas y ubicación de unas supuestas armas. Finalmente lo amenazan de muerte y a ojos vendados le obligan a firmar un documento. El 15 de octubre de 1973 lo dejan en libertad. A raíz de lo sucedido, sufre dolores en la columna y crisis ansiosas post traumáticas.

**2.- MANUEL JESÚS PINOCHET SALAZAR**, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura de Chile N° 19.092. Fue



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CMNXXFFXRQT

detenido el 12 de septiembre de 1973, en un allanamiento realizado por funcionarios de carabineros y militares, mientras se encontraban en el pensionado de la universidad (UTE). Fue sacado con ropa interior a la fuerza y descalzo a punta de golpes. Lo llevaron inicialmente a la casa central, para luego ser trasladado al Estadio Chile, donde permaneció hasta el 16 de septiembre. Finalmente lo trasladan al estadio nacional hasta salir en libertad el 04 de octubre del año 1973. Durante su detención, recibió golpes de corriente, golpes de puño, pie y con objetos en todo el cuerpo, especialmente en la zona genital y costillas. Todo lo anterior, sumado a las amenazas constantes de muerte a su familia y falsos fusilamientos, dejaron secuelas que se reparan hasta el día de hoy.

**3.- LUIS ALBERTO SILVA MELLADO**, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura de Chile N° 23.364. Fue detenido por carabineros a los 17 años de edad, se encontraba en la población Santa Julia, al regresar de la Capilla San Carlos el día 12 de agosto de 1983. Lo llevan a la 19° Comisaría, ubicada en calle Rodrigo de Araya. En ese lugar fue despojado de su ropa y brutalmente golpeado en todo el cuerpo. Posteriormente, lo trasladan a la Comisaría de Menores, donde le entregan un parte indicando que portaba explosivos y panfletos, hecho que nunca ocurrió. Por el tiempo que estuvo desaparecido se presentó un recurso de amparo. El 14 de agosto es dejado en libertad.

**4.- ROBERTO ENRIQUE POZO RIVEROS**, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura de Chile N° 19.460. Fue detenido por funcionarios del SIM a cargo del cabo Mura, el 1 de agosto del año 1974 en la vía pública, Puente Alto. Lo suben a una camioneta con dirección al Regimiento Puente Alto, al llegar, lo ingresan a una habitación con otros soldados, quienes, en un acto de cordialidad, le ofrecen una taza de café caliente, que luego tirarían en su cara, aprovechando ese momento le cubren la cabeza y tronco con un saco para comenzar con los golpes y posteriormente interrogarlo, preguntando por dinero en dólares, mimeógrafos, por personas, direcciones y reuniones políticas. Al no estar satisfechos con las respuestas, lo desnudaron y vendaron sus ojos con una bufanda ensangrentada, para después mojarlo y dejarlo en el patio por varias horas al frío. Luego de esto, al pedir permiso para orinar, lo pusieron en la famosa "parrilla" y comenzaron a aplicarle corriente en el pene, testículos, orejas, ano, axilas y planta de los pies. Lo amenazaron con cortarle el pene con un esmeril que tenían encendido, finalmente le cortaron el muslo derecho y amenazan con cortarle la pierna completa si no hablaba. No recuerda exactamente cómo ni por qué lo llevaron por un tiempo a la Comisaría de Puente Alto, donde también sufrió



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CMNXXFFXRQT

maltrato. Hasta que un día un subteniente de reserva llamado Berríos llegó a buscarlo para trasladarlo de vuelta al Regimiento. En los interrogatorios le rompieron los dedos de las manos y arrancaron sus uñas con un alicate, luego le sumergían los dedos en cloro; lo amenazaban con la muerte de su esposa Ana Osorio (quien se encontraba detenida también) e hijos, vivió también constantes simulacros de fusilamiento. Una noche lo amarran junto a otros prisioneros, les cubren los ojos y los suben a patadas a un vehículo para llevarlos a un sitio baldío, les indican que deben esperar 20 minutos. Se quedaron mucho rato todos quietos, ensangrentados y golpeados, no se escuchaba ruido alguno y ya había transcurrido ese tiempo de espera. De pronto, entre ellos mismos, se comienzan a soltar y notan medios desorientados que los habían dejado en libertad, entre Vicuña Mackenna y Santa Rosa, el 17 de septiembre de 1974. Fue detenido por segunda vez 4 días después, en su domicilio mientras militares allanaban su casa. Volvió al regimiento a pasar los mismos vejámenes descritos anteriormente. Días después lo trasladan a un lugar que no logró identificar, lo mantienen en posiciones forzadas por largas horas. Una noche lo vuelven a poner en “la parrilla” para aplicarle corriente, después lo cuelgan de las muñecas en una ventana metálica muy alta. Al momento de bajarlo le propician nuevamente golpes que le dislocaron la rodilla y provocaron astillamiento en la canilla izquierda. Cuando estaba en el suelo le patearon el estómago hasta vomitar sangre, le enterraron alfileres calientes en la frente, hecho que le provocó cáncer de piel, ya que nunca sanaron correctamente dichas heridas, generando lunares y protuberancias cancerosas.

**5.- MANUEL RENÉ PARADA SALDÍAS**, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura de Chile N° 18.163. Su primera detención se realizó el 11 de septiembre de 1973 por militares, es llevado al Ministerio de Defensa. Al día siguiente lo trasladan al Estadio Chile, y días después al Estadio nacional, quedando libre el 25 de octubre de 1973. Durante este periodo recibió golpes de culatazos, patadas, maltrato psicológico, simulacro de fusilamiento y aplicación de electricidad en partes sensibles del cuerpo. En octubre de 1977, secuestran a su esposa embarazada, quien da a luz a un varón, que hasta el día de hoy se encuentran buscándolo. Su segunda detención ocurre el 3 de septiembre de 1984, detenido por la CNI en la vía pública (Conchalí), es acusado de lanzar panfletos relativos a la protesta de los días 4 y 5 de septiembre. Es llevado hasta el Cuartel Central de la Policía de Investigaciones de Chile donde permanece por tres días, mientras lo interrogaban por la procedencia de los panfletos,



le aplicaban corriente eléctrica. Finalmente consigue su libertad el 6 de septiembre de dicho año.

**6.- PEDRO ALEJANDRO MUÑOZ MIRANDA**, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura de Chile N° 16.225. Tiempo antes de ser detenido, sostiene que fue hostigado por personal de Carabineros de la Tenencia de Concón, acusado sin pruebas de ser partícipe del “Plan Z”. Su detención se lleva a cabo en la vía pública, el 15 de octubre de 1973 por una patrulla de la Armada de Chile en Concón. Violentado físicamente es llevado a la Escuela de Armamento de Las Salinas, donde estuvo 40 días detenido, maniatado, encapuchado, recibió todo tipo de insultos y amenazas hacia él y su familia, golpes de puño y pie, golpes con el fusil que lo llevaron a perder su dentadura, simulacros de fusilamiento. El alimento era escaso, sin medicamentos y privado de sueño, los golpes que recibía sobre sacos mojados le hicieron perder la conciencia, su abdomen recibía gran parte de las agresiones, por lo que sus deposiciones se tornaron negras con abundante sangre. El 20 de noviembre de 1973, es dejado en libertad. Actualmente presenta problemas dorso lumbares, también en extremidades y articulaciones. Además, trastornos del sueño (insomnio y pesadillas), depresión e inseguridad.

**7.- GERMÁN LUIS PARRA MARDONES**, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura de Chile N° 18.300. Refiere haber sido detenido en su hogar (comuna de Renca), en la madrugada durante un allanamiento el 9 de abril del año 1980, por efectivos de la CNI. Fue acusado de ser experto en bombas, en su calidad de electricista, y posteriormente llevado a dependencias de la CNI para ser interrogado. En ese lugar fue víctima de falsos fusilamientos, golpes de puños y corriente eléctrica con el objetivo de que entregara los nombres de personas con las que trabajaba. A mediados de abril fue trasladado a la penitenciaría, después de 4 años lo dejan en libertad el 9 de abril de 1985. Actualmente, el resultado de las torturas se refleja en su columna, ya que, se lesionó 2 discos intervertebrales producto de los golpes. Además, presenta falla cardíaca por los golpes de electricidad que recibió. El daño psíquico se mantiene de forma permanente.

Luego, bajo el acápite que denomina “**Daño Producido**”, señala que los tormentos ya han sido descritos para cada caso en particular y no tiene sentido relatarlos nuevamente, por lo que queda claro que, como consecuencia directa de las torturas producidas a los demandantes se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico, como físico inconmensurable provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial. Los daños físicos y psíquicos tienen carácter de permanentes, pues, aunque hayan transcurrido más de cuarenta años de lo sucedido las personas



continúan con secuelas producto de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fueron sometidos, además de que muchos fueron obligados, directa o indirectamente, a abandonar el país, sin poder retornar, algunos incluso alejándose de sus familias.

Señala que como expresó la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura “Lo cierto es que la mayoría de las víctimas que prestaron testimonio ante esta Comisión fueron expuestas a situaciones límites que erosionaron soportes de sus vidas y dislocaron sus proyectos. Sus confesiones ilustran algunas de esas dimensiones: Perdí a mi familia durante la prisión. Lo físico ha pasado, aunque tengo una cicatriz, pero quedó la marca para la vida [...] lo más importante es el efecto psicológico del maltrato personal y a otras víctimas, que deja una huella imborrable y difícil de describir. Es una pena y clase de dolor impregnado en el alma. Hombre, detenido en 1974, a los 35 años, Región Metropolitana. Me cambiaron... Nos cambiaron la vida junto a mi esposa, nos marcaron para toda la vida, nos metieron el miedo hasta los huesos... Me habían... detenido..., secuestrado..., torturado..., humillado..., pateado..., golpeado..., insultado..., relegado..., pasado de hambre..., flaco..., ojeroso..., herido en el alma... Hombre, detenido en 1973, a los 24 años, Región Metropolitana. La tortura ha sido conceptualizada como una experiencia traumática que ha provocado consecuencias sistémicas. No es solamente una modalidad compleja de agresión, crueldad y denigración. Sus efectos desquiciantes se agravan precisamente porque son agentes del Estado o personas a su servicio quienes dañan en nombre de la patria. Dadas estas características, se puede afirmar que las condiciones de prisión política y tortura descritas en este Informe violaron los derechos de las personas, causándoles daños emocionales, morales y materiales...”. Refiere que esos daños emocionales, morales y materiales que necesariamente se causaron a las víctimas de torturas, son lo que se pide en esta demanda sean indemnizados. Menciona conceptos de daño moral expresados por la Corte Suprema.

Sostiene que por lo antes expuesto es que se demanda al Fisco de Chile, por daño moral, como consecuencia directa del secuestro y torturas de que fueron objeto, el pago de doscientos millones de pesos (\$200.000.000), para cada uno de los demandantes, suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio; o en su defecto el monto indemnizatorio que estime el tribunal de conformidad con su apreciación y valorización del daño.



Se remite luego al **Derecho**, indicando que, respecto de los hechos delictuosos narrados precedentemente, es civilmente responsable el Estado de Chile, ya que a quienes se acusa su autoría, a la fecha de su comisión, eran miembros del Ejército de Chile y de otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública o civiles adscritos a las mismas, quienes se encontraban revestidos de autoridad pública y a ese respecto el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en la práctica de secuestro y tortura ocurrida durante la dictadura militar, mediante distintos actos e instrumentos jurídicos, entre ellos cabe destacar el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, denominado “Informe Valech”. En efecto, en el mencionado Informe Valech, los demandantes fueron reconocidos como víctimas de prisión política y tortura. La responsabilidad del Estado, por el daño moral ocasionado a los actores, emana en primer lugar de un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos, el que se ha desarrollado sobre la base de la jurisprudencia y de la legislación especial, y que es anterior a la fecha de comisión de los hechos juzgados en la presente causa. En suma, la responsabilidad del Estado emana del Derecho Administrativo, en razón del hecho propio del Estado al haber actuado como órgano cometiendo actos ilícitos que causaron daño a las personas, específicamente de la Constitución Política de 1925, de la Constitución Política de 1980 y del Derecho Internacional.

Se exploya acerca de **la responsabilidad del Estado en la Constitución Política de 1925**, indicando que la responsabilidad del Estado consagrada en las Actas Constitucionales números 2 y 3 y, en la actualidad, en la Constitución de 1980, reconoce claros antecedentes en la Constitución Política de 1925, vigente a la época de estos actos ilícitos. Menciona que, la doctrina iuspublicista ha sostenido que existe un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos. Se refiere a doctrina sobre la materia del autor don Eduardo Soto Kloss. Refiere que otros preceptos que sustentan el principio general de responsabilidad del Estado, a la luz de la Constitución de 1925, son los artículos 4, 10 N° 1 y 10N° 9 y se extiende al efecto.

A continuación comenta acerca de la **imprescriptibilidad de la acción**, indicando que la acción de derecho público para exigir la responsabilidad del Estado por actos u omisiones por las cuales se ha



producido daño a personas que no se encuentran sujetas a sufrir el gravamen de soportarlos por atentar, a la igual repartición de las cargas públicas, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, según la doctrina unánime de los autores iuspublicistas, es imprescriptible. La responsabilidad del Estado es un problema de derecho público y al cual cabe aplicar reglas de derecho público y no las normas del Título XXXV del Código Civil. Señala doctrina del profesor Eduardo Soto Kloss, en ese sentido.

Redundando sobre lo anterior, señala que la jurisprudencia de los tribunales superiores también ha recogido la inaplicabilidad de las reglas del Título XXXV del Libro IV del Código Civil y, por ende, de las reglas en materia de prescripción. Cita jurisprudencia al efecto. Continúa indicando que, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

Sintetiza sosteniendo que, las normas en materia de prescripción que contempla el Código Civil para los delitos y cuasidelitos no resulta aplicable a los procesos en que se persiga la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que en el caso de marras también existen las normas de derecho público que rigen la responsabilidad del Estado como son los preceptos citados de la Constitución de 1925, ergo la acción que se ejerce en estos autos es imprescriptible.

Continúa indicando en cuanto a la **forma de operar de las disposiciones constitucionales**, que las disposiciones constitucionales que consagran la responsabilidad del Estado por los daños cometidos en cualquiera de sus actividades tienen una vinculación directa sin ser necesaria la dictación de una norma de inferior rango que disponga su aplicación; es decir, poseen operatividad propia y, obviamente, desde el momento que asumen su carácter de normas constitucionales priman por sobre toda otra disposición, por esa razón y dada la inexcusabilidad de su función consagrada en la propia Constitución, el juez se encuentra sujeto a la inoperatividad de resolver el caso sometido a su conocimiento y en esa función la primera exigencia es someterse a la norma fundamental vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, la cual establecía



clara y precisamente la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados por sus órganos.

Indica en lo que toca a **la recepción de esa doctrina por parte de la jurisprudencia nacional** que la citada responsabilidad del Estado, fundada en una primera etapa sobre la legislación civil, evolucionó para fundarse en principios de derecho público. Indica que, la doctrina cita como los primeros fallos en que se sustenta la responsabilidad en principios de derecho público “Sociedad Fuschs y Plath con Fisco”, sentencia de 11 de enero de 1908 y “Lapostol con Fisco”, sentencia de 8 de enero de 1930. Sin embargo, será en la sentencia dictada en “Hexagon con Fisco”, de 28 de julio de 1987, en que expresamente se declaran inaplicables las disposiciones del Código Civil para decidir la demanda dirigida contra el Fisco, resolviendo el caso sobre la base de las normas constitucionales y legales diversas al Código Civil y desestima la infracción del artículo 2332 del citado Código al no darle aplicación e igualmente las referidas a las Actas Constitucionales N° 2 y 3, la Constitución y Ley Orgánica Constitucional N° 18.575, en que radica el origen de la responsabilidad del Fisco.

Destaca que la jurisprudencia, sobre la base de la legislación especial, ha sustentado la responsabilidad de la Administración y esa normativa especial arranca de los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 38 de la Constitución Política de la República, 4° y 42 de la Ley N° 18.575. La norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 no afecta la disposición del artículo 4°, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración del Estado que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública. En lo sustancial la jurisprudencia ha evolucionado hasta llegar a un estado, pacífico en la actualidad, que reconoce la responsabilidad del Estado-Administrador, exigiendo, en la mayoría de los casos, un factor de imputación. En el caso el factor de imputación es la responsabilidad del órgano por la falta personal del agente. La doctrina de la responsabilidad del Estado emanada del Derecho Público ha sido recogida íntegramente en el histórico fallo dictado en el caso del homicidio de los profesionales Guerrero, Nattino y Parada, el que se encuentra ejecutoriado. Cita jurisprudencia al efecto.

Refiriéndose a **otras disposiciones que obligan a indemnizar**, redundando indicando que, sin perjuicio de la obligación del estado de indemnizar los daños causados por sus órganos en el ejercicio de sus funciones en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política de 1925, las Actas Constitucionales y la



Constitución de 1980, su responsabilidad extracontractual también emana de la acción de indemnización contemplada en los artículos 4 y 44 de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado que consagran la responsabilidad del Estado por falta de Servicio, normas en la que se hace responsable al Estado por los daños que causen los órganos de la Administración, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.

Sostiene sobre **la concurrencia de los requisitos para indemnizar en el caso de autos**, que en el **caso ad litem** se dan todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados: 1.- En cuanto al daño moral, por el solo hecho de haberse producido un delito éste se presume. 2.- La acción u omisión emanó de un órgano del Estado, agentes del Estado torturaron a sus mandantes sin que hayan demostrado la sujeción a procedimiento legal alguno. El hecho que causó daño fue ejecutado por el Estado de Chile, puesto que fue un órgano de su administración el que actuó y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal. 3.- Nexo causal. El daño a las víctimas emana, justamente, de la perpetración del delito civil. 4.- Por último, no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.

Sigue comentando acerca de los **fundamentos del Derecho Internacional que obligan al Estado a indemnizar**, precisando que, de acuerdo a los hechos narrados precedentemente y que afectaron a cada uno de los demandantes, los agentes del Estado incurrieron en una falta personal, al privar de forma ilegítima de la libertad y someter a torturas a los demandantes y en esa perspectiva el Estado, no puede desvincularse de la falta en que incurrieron sus agentes, ya que fue el propio Estado el que les asignó la función pública de reunir información estratégica para la seguridad nacional, la que ejercieron abusivamente cometiendo falta personal en su ejercicio, comprometiendo con ello la responsabilidad del Estado y atendido además que los hechos generadores de la responsabilidad que se demanda, tienen además el carácter de violación a los derechos humanos, delito de lesa humanidad, crimen de guerra, u otra calificación concurrente con la de secuestro agravado o torturas, la responsabilidad del Estado debe determinarse asimismo de conformidad con los convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional que se consideran iuscogens y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que “el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales” y



que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su responsabilidad internacional (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, "Las Constituciones Latinoamericanas", página 231. En efecto, de acuerdo con este último precepto la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones de Derecho Interno. A este respecto debe también tenerse presente el carácter consuetudinario de estas normas y que atendida su naturaleza no son creadas sino simplemente reconocidas por los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicación, de manera tal que produciéndose un hecho ilícito imputable a un Estado la responsabilidad de éste surge de inmediato por la violación de la norma de Derecho Internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias indeseadas. Indica que, en el mismo sentido, el artículo 131 de la Convención de Ginebra pretende hacer efectiva la responsabilidad que resulta de esta clase de hechos y no se limita a la de carácter penal. Lo mismo ocurre con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, que previene -según ya se afirmó- que los Estados no pueden invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales -en la especie la de establecer responsabilidades-, incumplimiento del que ciertamente derivaría responsabilidad por un ilícito de índole internacional. Lo anterior conduce a sostener que el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es, uno de aquéllos que los Estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática, el que por su naturaleza es imprescriptible. El Derecho Internacional, tanto a partir de normas consuetudinarias como convencionales, ha establecido que un hecho ilícito internacional genera la responsabilidad del Estado y la consiguiente obligación de reparar el daño. Para que esta responsabilidad pueda hacerse efectiva deben concurrir dos elementos. El primero de ellos es la violación de una obligación internacional, situación que en el caso presente se encuentra plenamente cumplida pues la privación ilegítima de libertad y las torturas graves y reiteradas, cometidos en contra de los demandantes, mirados desde la perspectiva del derecho internacional, asumen la tipología de delitos contra el derecho internacional. Y en este caso específico, como delitos de Lesa Humanidad. En efecto, agrega, en la medida que el ilícito cometido se da en el contexto histórico de atentados masivos, reiterados y sistemáticos en contra de la población, motivados por móviles políticos e ideológicos y ejecutados por agentes estatales, otorgan la configuración de un delito



de Lesa Humanidad, con las naturales consecuencias jurídicas que derivan de dicha calificación.

Finaliza enfatizando sobre **la procedencia de la indemnización del daño moral**, señalando que la responsabilidad del Estado es integral, es decir, debe repararse y todo daño causado a un particular y, para una correcta interpretación de estas disposiciones que dejan un claro vacío las normas de derecho administrativo indicadas, es necesario acudir al derecho común. La indemnización comprende -según el artículo 2329- todo daño, por lo que naturalmente está incluido el daño moral. La procedencia de la reparación del daño moral está reconocida en forma unánime por la doctrina y jurisprudencia nacional, ya a estas alturas resulta indiscutible. En efecto, toda persona que alega que el perjuicio causado a un tercero le lesiona directamente a ella, puede iniciar una acción de reparación por el daño que le provocó esta situación. Es más, se ha dicho con insistencia por los tribunales nacionales, que los daños morales provocados a los parientes más próximos no necesitan de prueba, presumiéndose el perjuicio por la muerte de su pariente, fluyendo de todo lo ya señalado que el Estado de Chile debe responder por el perjuicio que han ocasionado funcionarios del Ejército de Chile actuando en su calidad de tal, puesto que se dan todos los supuestos necesarios para determinar el perjuicio moral sufrido por los actores.

**SEGUNDO.-** Que, por su parte, el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, **contestando la demanda**, en primer lugar, bajo el título “De la Demanda”, repasa la misma, indicando que se interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, solicitando sea condenado a pagar la suma total de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos), para cada uno de los demandantes, más reajustes, intereses y costas, como reparación por daño moral con motivo de haber sufrido detención ilegal, apremios ilegítimos, prisión ilegal y torturas sufridos, hechos cometidos por agentes del Estado a partir del mes de septiembre de 1973 y abril de 1985, respectivamente e invoca como fundamento normativo los artículos 5º; 6; 7 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 4º del DFL 1-19.653, 63 de la “Convención Americana de Derechos Humanos” o “Pacto de San José de Costa Rica” y en general del complejo normativo denominado “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, todo lo cual configuraría una responsabilidad extracontractual imprescriptible.

Luego, en el apartado II denominado “*Excepciones, Defensas y Alegaciones...*”, opone la **excepción de reparación integral, improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizados los demandantes**, refiriéndose al marco



general sobre las reparaciones otorgadas y a la complejidad reparatoria, indicando que se debe comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos posicionando correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional, pudiendo efectuarse dicha comprensión sólo al interior –y desde– lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada “*Justicia Transicional*”. Indica que, en efecto, el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional<sup>1</sup>. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema. Señala que no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Indica que las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación. Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero<sup>3</sup>. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones, bastando para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella.

Señala que asumida la idea reparatoria, la Ley 19.123 y las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación y la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante



la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; c) Reparaciones simbólicas; todas mediante las cuales se ha concretado el objeto del particular proceso de justicia transicional, que no busca otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Analiza con mayor detalle cada una de ellas, resaltando que en cuanto a reparaciones específicas los actores ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N° 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo **“Listado de prisioneros políticos y torturados”** de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas y así se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, consigna que el actor ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.

Refiriéndose a lo que denomina como la **identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas**, indica que, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente. Reproduce jurisprudencia en ese sentido y menciona que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas y en ese mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades. Concluye que, estando la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, y al tenor de documentos oficiales que indica acompañar, es que opone la excepción comentada.

Luego, en el numeral **II.2**, opone la **excepción de prescripción extintiva de la acción deducida de indemnización de perjuicios** con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código



Civil (cuatro años), en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes, argumentando que conforme a los relatos efectuados por los actores la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrieron, ocurrieron a entre los meses de septiembre de 1973 y abril de 1985, según sea el caso y siendo del caso, que entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **20 de diciembre de 2018**, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, en caso que el tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesta, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Se extiende sobre generalidades y fundamento de la prescripción, indicando que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe y que, la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Al efecto, se remite a jurisprudencia.

Sostiene finalmente en cuanto a la alegación contenida en la demanda, de imprescriptibilidad de la acción para obtener la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, haciéndose cargo de ciertos instrumentos internacionales, los que asegura que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en la materia, entre éstos, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, la Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



Se refiere al **contenido patrimonial de la acción indemnizatoria**, indicando que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción. Estima que sobre el particular debe considerarse, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial, bastando considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Se remite a **normas contenidas en el Derecho Internacional**, indicando que, en cuanto a la alegación contenida en la demanda, de imprescriptibilidad de la acción para obtener la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, resulta necesario invocar ciertos instrumentos internacionales los cuales ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia, citando al efecto, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, que se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto la Excma. Corte Suprema, la Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada *"Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la*



*humanidad*”, la Convención Americana de Derechos Humanos, destacando de esta última que, al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Menciona que, **el planteamiento sostenido ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema**, la que ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1.133-06, caratulados “**Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile**”, de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas, aconteciendo lo mismo en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “**Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile**”, autos ingreso N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007. Agrega que, en consecuencia, no habiendo, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que según el mérito de lo expuesto precedentemente se deberá rechazar la demanda por encontrarse prescritas las acciones deducidas.

Sobre **el daño e indemnizaciones reclamadas, señala que, en subsidio** de las defensas y excepciones precedentes, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido, haciendo presente que según se desprende del relato fáctico que sirve de fundamento a las acciones de cada demandante en particular, es distinto en cada caso, sin embargo, en la demanda se pide la misma cantidad de dinero para cada uno de ellos, lo que haría suponer que todos fueron privados de libertad en un solo acto, lo que no es así, sosteniendo en efecto, que en unos casos la privación de libertad duró dos días, en otros, un mes,



en algunos casos más de un año, en tanto que en otros casos fue más de una detención. En suma, se exponen en la demanda múltiples circunstancias disímiles unas de otras. La acción de indemnización de perjuicios que ejerce cada uno de los actores, es diferente a la de los demás, exponiendo en la demanda múltiples circunstancias disímiles unas de otras. Esa falta de similitud de un caso a otro naturalmente incide en la apreciación del daño moral, porque las situaciones descritas no son todas iguales y el tribunal deberá ponderar y categorizar cada caso en particular y los casos similares, no siendo procedente en modo alguno estimar o ponderar una indemnización igual para todos los actores, porque ello contradice una apreciación en concreto respecto de cada caso en particular.

Luego, con relación al daño moral hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente, produciendo a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria. Añade que, en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Tratándose del daño puramente moral, la finalidad descrita no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Advierte que, tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades. En tal sentido, la cifra pretendida en la demanda como



compensación del daño moral, resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile y los montos promedios fijados por los tribunales de justicia, que en este materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las alegaciones precedentes de reparación satisfactiva y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del estado y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, se debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por los demandantes de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que “seguirán percibiendo a título de pensión”, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral y de no accederse a esa petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Sostiene la improcedencia del pago de reajustes e intereses haciendo presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Añade que, a la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene el demandado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse, lo que implica que, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Hace presente en cuanto al reajuste que éste es un mecanismo económico financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal, por lo que no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, cita el artículo 1551 del Código Civil que establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

**TERCERO.-** Que, evacuando el trámite de **réplica** la demandante reitera íntegramente lo dicho en la demanda solicitando



sea acogida con costas. Resalta respecto de los hechos que, el Fisco de Chile, en una actitud de buena fe no discutió los hechos invocados en la demanda y la discusión sólo se presenta en el ámbito del derecho y los perjuicios.

Adiciona en cuanto a la excepción de reparación integral que, el hecho de haber obtenido pensiones de reparación con arreglo a la ley N° 19.123 por parte de algunos familiares, no es óbice para que se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, que es un tribunal de la República. La pretensión del Fisco de Chile, de oponer excepción de pago, resulta inconciliable con la normativa internacional ya señalada en la demanda, porque el derecho común interno sólo es aplicable cuando no la contradice con el Derecho Internacional. La preceptiva invocada por el Fisco -que sólo consagra un régimen de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es dable presumir que se diseñó para cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos porque se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación citada, no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley.

En cuanto a la excepción de prescripción opuesta por el demandado, señala que reiterada jurisprudencia de la E. Corte Suprema ha señalado que tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie- cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resultando coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, comprendidos en los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación en



orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama, por lo que pretender aplicar las disposiciones del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente.

Indica que, en la situación de hecho demandada, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de él emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- del eventual ejercicio de la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado. Señala que todo lo señalado, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5°, inciso segundo, y 6° de la Constitución Política de la República. Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una regla internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias del agravio, es decir, no resultan aplicables a estos efectos las reglas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios.

En cuanto a los montos de indemnización demandados estima estar totalmente ajustado a la justicia ya que se trata del daño moral de la mayor entidad, sin perjuicio de ello, inútil resulta esa discusión puesto que será el tribunal quien determinará soberanamente el monto del daño moral y desde cuando se aplican los reajustes e intereses.

Finaliza indicando que los reajustes e intereses demandados están conforme a derecho puesto que un tribunal fija los montos en un momento determinado, pensando en el valor adquisitivo de esa fecha, razón por la cual tiene que considerar la desvalorización. Agrega que, a este respecto los tribunales del fondo serán soberanos para fijar el



momento desde el cual comienza, se reajustan y devengan intereses de los montos fijados como indemnización.

**CUARTO.-** Que, evacuando el trámite de **dúplica** la demandada reitera todas las alegaciones, excepciones y defensas planteadas en el escrito de contestación a la demanda y con el mérito de ellas solicita el rechazo de la acción deducida, no obstante ello, hace presente en cuanto a la excepción de reparación satisfactiva que los demandantes afirman que las pensiones de reparación otorgada por el Estado a los familiares conforme a la Ley 19.123 serían plenamente compatible con la indemnización que en autos se persigue, por no tener el carácter de reparación de daño moral, pues solo le atribuyen el carácter de una ley que otorgó pensiones asistenciales que no apuntaron a reparar el daño moral. Afirma que el Estado de Chile adoptó una política integral de reparación tanto en dinero, beneficios de salud, construcción de memoriales, etcétera, por lo que por ello es integral y no sólo una mera denominación. Si solo considerara lo que significa en gastos para el Estado y la sociedad en su conjunto resulta claro que se persiguió reparar el daño moral.

Indica que respecto de la excepción de prescripción que opuso, la demandante sostiene que la acción civil indemnizatoria deducida tiene el carácter de imprescriptible por emanar de la comisión de un delito de lesa humanidad, lo que sería coherente con la doctrina y con la jurisprudencia internacional “del llamado Derecho Internacional De Los Derechos Humanos”. Al efecto, indica que a diferencia de lo sostenido por la actora, rememora que durante más de 10 años la Corte Suprema consideró invariablemente que la acción prescribía conforme a lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil, en 4 años. Resalta en ese sentido que, reiterada e invariable jurisprudencia mayoritaria de la Excma. Corte Suprema que aplica el art. 2332 del código civil a la acción por responsabilidad extracontractual del estado

Reitera recientes sentencias de la Excelentísima Corte Suprema, que invoca en el escrito de contestación a la demanda, las que en materia de indemnización de perjuicios por violación de derechos humanos, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco de Chile, se pronunció sobre la prescripción de las acciones deducidas.

En cuanto al monto de la indemnización reitera lo señalado al contestar la demanda, solicitando considerar especialmente que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile y los montos promedios



fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

Respecto a los reajustes e intereses reitera lo señalado en la contestación de la demanda, solicitando al tribunal tener presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Enfatiza en que a la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene el demandado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse, todo lo cual implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada. Por otra parte, el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal, resultando absurdo pretender aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha que precede a la determinación del monto por sentencia ejecutoriada.

**QUINTO.-** Que, recibida la causa a prueba consta que la **demandante** ha aparejado por el primer otrosí de su libelo de folio 1 y presentaciones de folios 28 y 44, prueba **documental** consistente en:

**1.-** Copia autorizada de escritura pública de fecha 18 de octubre de 2018, otorgada ante notario público de Puente Alto don Eugenio Camus Mesa, y anotado en Repertorio N° 3248-2018, donde consta mandato judicial conferido por los demandantes de autos a don Omar Cabrera Cabezas, para actuar en sus representaciones.

**2.-** Copias conforme con su original de fichas y reconocimiento de víctimas de Prisión Política y Torturas de los demandantes de autos y otorgadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH).

**3.-** Certificado Psicológico y Social emitido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS, de fecha 2 de octubre de 2019, suscrito por doña Fresia Vargas Neira, Psicóloga clínica y don José Guzmán Rojas, trabajador social, Director Ejecutivo, que informa acerca de los daños y consecuencias sociales, morales y en la salud mental sufridas por los demandantes.

**4.-** Nomina de Víctimas de Prisión Política y Torturas reconocidas por el Estado de Chile mediante la comisión Valech, I y II, en las cuales consta la calidad de tales de los demandantes de autos.

**SEXTO.-** Que, sin perjuicio de lo anterior la **demandante** rindió prueba **testimonial**, compareciendo ante estrados los siguientes testigos quienes debidamente individualizados y legalmente



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CMNXXFFXRQT

juramentados según consta del acta de folio 27 y al tenor de la interlocutoria de prueba de folio 18, fueron contestes en expresar: **Don Gustavo Antonio Cádiz Vergara, don José Miguel Guzmán Rojas y don Adán Jesús Urbano García; N° 1**, les consta que fueron víctimas de torturas, vejaciones y otros tratos inhumanos y degradantes, siendo estas personas adherentes al gobierno del momento. Todos ellos fueron calificados por la Comisión de Prisión Política y Torturas y reconocidos como tales en el Informe Valech el que esclarece la situación que cada uno vivió. En el caso de Pedro Muñoz, este fue detenido en Con Con y estuvo detenido por más de treinta días en el sector de Las Salinas, donde fue torturado y mantiene secuelas psicológicas hasta el día de hoy. En el caso de don Roberto Pozo, éste era interventor de la Escuela José Santos Ossa de calle Santa Rosa paradero 23. Fue llevado a los centros de torturas Cuatro Álamos y Villa Grimaldi y luego expulsado del país. Manuel Parada fue detenido en dos oportunidades, el 11 de septiembre de 1973 y en el año 1984, y en ambas oportunidades sufrió vejámenes y apremios ilegítimos. La mujer de Manuel pese a estar embarazada fue detenida naciendo su guagua en prisión, no fue devuelto a sus padres y se encuentra desaparecida hasta la fecha. José Manuel Pinochet era estudiante en la Universidad Técnica, fue detenido y llevado al Estadio Chile donde estuvo por alrededor de tres días y luego llevado al Estadio Nacional donde sufrió tratos inhumanos y torturas, salió a fines de octubre del año 1973. Por su parte, German Parra era trabajador de la empresa textil Hirmas Panal, era delegado, fue detenido y permaneció en el centro de torturas Cuartel Borgoño donde permaneció desde septiembre a octubre de 1973, luego volvió a ser detenido e involucrado en delitos terroristas de los cuales fue absuelto. En cuanto a Luis Silva Mellado fue detenido por Carabineros y llevado al Estadio Chile y luego al Estadio Nacional y después de pasar por todo tipo de torturas fue liberado. Lo expuesto lo saben y les consta porque el Informe Valech los reconoció, también por ser dirigentes de la organización de Derechos Humanos de Puente Alto, trabajador social y miembro del CINTRAS, y dirigente y Presidente de la Corporación de Promoción y Defensa de Víctimas de Prisión Política y Tortura de una data de 32 años, respectivamente, por lo que han compartido y conversado con cada uno de los actores y se han contado las vivencias que tuvieron en el periodo 1973 a 1984. El **segundo** de los testigos, agrega que han leído las fichas que mantiene la institución de cada uno de los demandantes donde se consignan los tipos de torturas que padecieron y lugares donde fueron vejados y humillados y las secuelas psicológicas, físicas y sociales que les dejó esa experiencia traumática, constándole que sus detenciones fueron



realizadas por agentes del Estado, ya sea efectivos militares, Carabineros, Investigaciones y agentes de la CNI y que las detenciones de los demandantes tuvieron lugar en la comuna de Puente Alto. **Repreguntado** el segundo de los testigos acerca de la existencia de algún informe elaborado por CINTRAS respecto de los demandantes y quien suscribe, responde que efectivamente existe un certificado que acredita el daño moral y psicológico que sufrieron esas personas suscrito por la psicóloga clínica Alejandra Vargas y José Miguel Guzmán Rojas en su calidad de Director Ejecutivo de esa institución de salud mental y Derechos Humanos con más de 32 años de experiencia en la atención especializada a sobrevivientes de torturas y sus familiares. **Repreguntado** el tercer testigo, señala que efectivamente los demandantes cuentan con el reconocimiento del Estado de Chile de ser víctimas de prisión política y torturas, reconocidos por la Ley 19.992; **Nº2**, lo saben y les consta porque conocen a los demandantes, han compartido con ellos y juntos han revivido los momentos difíciles, vivencias que fueron reconocidos en los informes Valech I y II; **Nº 6**, si existe el daño moral por las secuelas que hasta el día de hoy sufren los demandantes tales como trastornos psíquicos y físicos. Son todos ellos portadores de graves daños morales, sociales, psicológicos y físicos por las experiencias a las que fueron sometidos involuntariamente y que son imposibles de superar, son portadores de sintomatología ansiosa depresiva que aparecen recurrentemente afectando sus estilos de relaciones sociales, laborales, familiares hasta el día de hoy. Por años el silenciamiento y ocultamiento de la experiencia de torturas ha sido la forma de protegerse para evitar la estigmatización social y el eventual dolor a su familia con un alto costo síquico ya que ocultar algo demanda una gran energía síquica. También son portadores de mucha rabia, frustración y desesperanza ante la denegación de justicia a la situación vivida. El monto de los perjuicios materiales y morales demandados es invaluable por los niveles de daño sufridos por los demandantes. La suma demandada en algo podría compensar el daño causado a cada demandante y su entorno familiar.

**SEPTIMO.-** Que, por su parte la **demandada** ha aparejado por el segundo otrosí de su presentación de folio 6 y por presentaciones de folios 23, prueba **documental** consistente en:

- 1.-** Resolución TRA N° 45/142/2017, emitida por el Consejo de Defensa del Estado, sobre nombramiento de doña Ernestina Ruth Israel López, en el cargo de Abogado Procurador Fiscal de Santiago.
- 2.-** Certificados otorgado por el Secretario Abogado (S) del Consejo de Defensa del Estado, de fechas 08 de octubre de 2019, sobre



designación de doña Carolina Vásquez Rojas, para subrogar al Abogado Procurador Fiscal de Santiago.

**OCTAVO.-** Que, de igual modo el demandado Fisco de Chile, solicitó y obtuvo respuesta del Instituto de Previsión Social, que rola a folio 15, remitiendo Ord. DSGT N° 57.538-2019, de fecha 12 de febrero de 2019, emitido por el Jefe de Depto. Secretaria General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, por el que envía anexo con detalle de beneficios de reparación Leyes 19.992 y 20.874, obtenidos por los demandantes don Jorge Tiburcio Cáceres Garín, don Manuel Jesús Pinochet Salazar, don Luis Alberto Silva Mellado, don Roberto Enrique Pozo Riveros, don Manuel René Parada Saldías, don Pedro Alejandro Muñoz Miranda y don Germán Luis Parra Mardones, en sus calidades de víctimas de Prisión Política y Torturas Ley Valech.

**NOVENO.-** Que, del mérito de autos, documentos individualizados en el motivo Quinto del presente fallo y testimoniales analizadas en el motivo Sexto del presente fallo y dentro del contexto político de público conocimiento acontecido a partir del 11 de septiembre de 1973, con el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Salvador Allende Gossens, tomando el poder un régimen *de facto* que se extendería por casi 17 años, caracterizado por una situación de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, violencia política, jurídica y social de la que fueron víctimas cientos de miles de personas en el país, se encuentra acreditado que “efectivamente don **Jorge Tiburcio Cáceres Garín**, a la época de los hechos, trabajaba en la comisión servidora de cuentas de la Maestranza Jemo, ubicada en la comuna de Estación Central, simpatizante del partido socialista y del Gobierno del Presidente Salvador Allende. El día 11 de septiembre de 1973, fue detenido sin orden judicial ni causa legal, en circunstancias que efectivos militares allanaron la fábrica donde trabajaba, siendo puesto en el suelo boca abajo junto a otros trabajadores y recibiendo golpes de culatazos y el peso de los militares quienes caminaron sobre su cuerpo. Fue llevado en un camión militar hasta el Estadio Chile donde permanece hasta el día 15 de septiembre del mismo año, fecha en que es trasladado al Estadio Nacional donde permanece ilegalmente privado de libertad hasta el 15 de octubre de 1973, fecha en que fue puesto en libertad. Durante su prisión política fue interrogado en dos oportunidades sobre nombres de personas y ubicación de armas, con su cabeza cubierta y recibiendo golpes en diversas partes de su cuerpo. Fue amenazado de muerte. Previo a su libertad fue forzado a firmar un documento con los ojos vendados. En el año 1975 se fue a Argentina por no encontrar trabajo y debido a constantes persecuciones. Con ocasión a lo vivido



se mantiene nervioso, intranquilo y con dolor en su espalda: don **Manuel Jesús Pinochet Salazar**, para la época de los hechos tenía 23 años, era estudiante de la carrera de Ingeniería de Ejecución Calef. Refr. y A.AC., en la Universidad Técnica del Estado, UTE. Fue detenido el día 12 de septiembre de 1973, en circunstancias que se encontraba en el pensionado del establecimiento de educación superior, ubicado en Avenida Ecuador con calle Bernal Del Mercado, en la comuna de Estación Central, lugar que fue allanado por funcionarios de carabineros y militares. Fue sacado con ropa interior a la fuerza y descalzo a punta de golpes. Lo llevaron inicialmente a la Casa Central, para luego ser trasladado al Estadio Chile, donde permaneció hasta el 16 de septiembre de ese año. Luego es trasladado al Estadio Nacional, desde donde logra salir en libertad el 04 de octubre del año 1973. Durante su ilegal detención y privación de libertad, recibió golpes de corriente, golpes de culatazos, puños y pies, en sus genitales y costillas, especialmente en la zona genital y costillas. Fue sometido a falsos fusilamientos y víctima de constantes amenazas de muerte a su familia; don **Luis Alberto Silva Mellado**, para la época de acontecidos los hechos, tenía 17 años de edad, era estudiante de enseñanza media, participaba en el Centro Cultural de Balmaceda en la comuna de Ñuñoa, simpatizante del partido socialista. Fue detenido por efectivos de carabineros civiles, sin razón legal el día 12 de agosto de 1983, en la vía pública sector Rotonda Rodrigo de Araya, mientras regresaba de la Capilla San Carlos, en la Población Santa Julia, siendo llevado a la Comisaría de Tránsito ubicada en calle Rodrigo de Araya. En ese lugar fue despojado de su ropa y brutalmente golpeado en todo el cuerpo. Posteriormente, lo trasladan a la Comisaría de Ñuñoa, desde donde fue sacado por efectivos civiles quienes lo subieron vendado de sus ojos a un furgón y llevado a una parcela donde lo hicieron correr y permaneció por una hora para luego ser devuelto a la unidad policial donde nuevamente fue golpeado en todo su cuerpo, luego que entregan un parte indicando que portaba explosivos y panfletos, hecho que nunca ocurrió. Es dejado en libertad el 14 de agosto de ese año. Se presentó un recurso de amparo por los días de su desaparición y las torturas padecidas fueron informadas a la Vicaría de la Solidaridad; don **Roberto Enrique Pozo Riveros**, para la época de los hechos, estaba casado con Ana Osorio, era padre de familia, participaba en las Juventudes Comunistas y se desempeñaba como inspector de educación, interventor de la Escuela José Santos Ossa, ubicado en el paradero 23 de calle Santa Rosa. El día 01 de septiembre de 1974, a eso de las 20:00 horas fue detenido en la vía pública mientras transitaba por calle Uruguay con Pasaje Tres de la Población Maipo,



en la comuna de Puente Alto por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar a cargo de un efectivo identificado como el cabo Mura, quienes lo suben a una camioneta y llevan al Regimiento Puente Alto, donde es ingresado a una habitación con otros soldados, quienes le arrojan a su cara una taza de café caliente, le cubren la cabeza y tronco con un saco y comienzan a propinarle golpes siendo interrogado acerca de dinero en dólares, mimeógrafos, por personas, direcciones y reuniones políticas. Lo desnudaron y vendaron sus ojos con una bufanda ensangrentada. Fue mojado y dejado en el patio por varias horas al frío. Fue también torturado bajo el método conocido como “parrilla” con aplicación de corriente en el pene, testículos, orejas, ano, axilas y planta de los pies. Con un esmeril que tenían encendido le cortaron el muslo derecho y fue amenazado de cortar sus genitales y pierna completa si no daba información. Fue llevado por unos días a la Comisaría de Puente Alto, donde también sufrió maltrato. De vuelta en el regimiento en el transcurso de nuevos interrogatorios a los que fue sometido le rompieron los dedos de las manos y arrancaron sus uñas con un alicate, luego le sumergieron los dedos en cloro. Fue amenazado de dar muerte a su señora quien también se encontraba detenida y también de dar muerte a sus hijos. Padebió simulacros de fusilamientos. La noche del 17 de septiembre de 1974, fue amarrado, cubierto sus ojos y subido a patadas a un vehículo y dejado junto a otros prisioneros en un sitio eriazo en las inmediaciones de Avenida Vicuña Mackenna con calle Santa Rosa, donde lograron soltarse las amarras quedando libres. Transcurridos cuatro días en libertad, el día 22 de septiembre de 1974, fue nuevamente detenido y llevado al mismo destacamento y también llevado a otros lugares de detención y tortura, tales como Cuatro Álamos, Puchuncaví y cárcel pública. Durante su nueva y también ilegal privación de libertad volvió a ser víctima de los mismos vejámenes, tormentos y torturas descritas. Además fue mantenido en posiciones forzadas por largas horas, le aplicaron corriente en el cuerpo y seguidamente colgado de las muñecas en una ventana metálica. Los golpes recibidos le dislocaron la rodilla, provocándole astillamiento en la canilla izquierda y cuando estuvo en el suelo le patearon el estómago hasta vomitar sangre, le enterraron alfileres calientes en la frente, hecho que le provocó heridas que no lograron sanarse correctamente generando lunares y protuberancias cancerosas. Logró sobrevivir a los tratos crueles, inhumanos y degradantes y luego de alrededor de cinco meses de cautiverio recuperó su libertad el 13 de febrero de 1975, sin embargo, fue expulsado del país. El 09 de septiembre de 1974, se interpuso un recurso de amparo en su favor Rol 1067; don **Manuel René Parada**



**Saldías**, empleado administrativo, su primera detención ocurrió el 11 de septiembre de 1973, en calle Corte Suprema N°196, por efectivos militares quienes lo llevaron al Ministerio de Defensa. A día siguiente lo trasladan al Estadio Chile, y días después al Estadio nacional, recuperando su libertad el 25 de octubre de 1973. Durante este periodo recibió golpes de culatazos, patadas, maltrato psicológico, simulacro de fusilamiento y aplicación de electricidad en partes sensibles del cuerpo. En octubre de 1977, en la Isla Juan Fernández, secuestran a su esposa embarazada, quien da a luz a un varón quien no fue entregado a sus padres y que hasta el día de hoy siguen en su búsqueda. Fue víctima de una nueva detención ilegal acontecida el 3 de septiembre de 1984, originada por efectivos de la CNI, en circunstancias que transitaba por la vía pública en la comuna de Conchalí, acusado de lanzar panfletos relativos a la protesta de los días 4 y 5 de septiembre. Es llevado hasta el Cuartel Central de la Policía de Investigaciones de Chile donde permanece por tres días, mientras lo interrogaban por la procedencia de los panfletos, le aplicaban corriente eléctrica. Finalmente consigue su libertad el 6 de septiembre de ese año; don **Pedro Alejandro Muñoz Miranda**, a la época de ocurridos los hechos, trabajaba desempeñándose como maestro pintor del Departamento de Mantención de la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP, fue dirigente poblacional y sindical de la ENAP-Refinería Con-Con y militante del Partido Comunista. Fue hostigado por personal de Carabineros de la Tenencia de Concón, acusado sin pruebas de ser partícipe de un plan denominado "Plan Z". Su detención se lleva a cabo en la vía pública en camino Los Ositos, Reñaca, Concón, el 15 de octubre de 1973, por una patrulla de la Armada de Chile en Concón. Fue violentamente agredido y llevado a la Escuela de Armamento de Las Salinas, donde estuvo 40 días detenido, maniatado, encapuchado, recibió todo tipo de insultos y amenazas hacia él y su familia, golpes de piño y pie, golpes con el fusil que lo llevaron a perder su dentadura, simulacros de fusilamiento. Fue amenazado de muerte. Pasó hambre y fue privado del sueño, no contó con medicamentos, los golpes que recibió sobre sacos mojados le hicieron perder la conciencia, su abdomen recibía gran parte de las agresiones, por lo que padeció de hemorragias. El 20 de noviembre de 1973, es dejado en libertad. Actualmente presenta problemas lumbares, también en extremidades y articulaciones y pérdida de pieza dentales. Además, trastornos del sueño (insomnio y pesadillas), depresión e inseguridad, y; don **Germán Luis Parra Mardones**, electricista, encargado sectorial zona norte de la bolsa de cesantes, comité de vivienda, olla común, miembro de Decal-Renca y del comité Resistencia Mapu. Fue detenido el 09 de abril del año 1980, en horas



de la madrugada, en circunstancias que efectivos de la organización policial de inteligencia denominada Central Nacional de Informaciones, CNI, allanaron su domicilio en la comuna de Renca. Fue acusado de ser experto en bombas, en su calidad de electricista, y posteriormente llevado a dependencias del recinto Lo Caña de la CNI, para ser interrogado. En ese lugar permaneció hasta el 14 de abril de 1980, y fue víctima de falsos fusilamientos, golpes de puños y aplicación de corriente eléctrica con el objetivo de que entregara los nombres de personas con las que trabajaba. Fue puesto a disposición de un tribunal militar quienes iniciaron en su contra la causa Rol 255-1980, por tenencia ilegal de explosivos resultando condenado a presidio sin haber tenido un justo juicio. A mediados de abril del citado año, fue trasladado a la penitenciaría y recupera su libertad el 9 de abril de 1985. Se interpusieron a su favor en la época un recurso de amparo y una querrella. Actualmente, el resultado de las torturas se refleja en su columna, ya que, se lesionó 2 discos intervertebrales producto de los golpes, recibiendo tratamiento en Francia. Además, presenta falla cardíaca por los golpes de electricidad que recibió. El daño psíquico se mantiene de forma permanente. Por las experiencias vividas y padecimientos sufridos, don Jorge Tiburcio Cáceres Garín, don Manuel Jesús Pinochet Salazar, don Luis Alberto Silva Mellado, don Roberto Enrique Pozo Riveros, don Manuel René Parada Saldías, don Pedro Alejandro Muñoz Miranda y don Germán Luis Parra Mardones, han sido reconocidos por el Estado de Chile como víctimas calificadas de prisión política y torturas por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, mejor conocida como “Comisión Valech I y II”, con los números 3.905, 19.092, 23.364, 19.460, 18.163, 16.225 y 18.300, respectivamente, de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas. Tales acontecimientos experimentados por los demandantes, todos sobrevivientes de torturas durante la dictadura cívico militar, le afectó directamente la salud física, psicológica y emocional de manera integral e irreparable, y que ocasionaron secuelas que han permanecido en el tiempo y que han derivado en una interrupción y alteración de la vida, permanente depresión, angustia, sufrimiento y temores y consecuente inestabilidad social y laboral y dificultades para el desarrollo de una vida plena”.

**DECIMO.-** Que, es posible establecer que estos mismos hechos descritos en los párrafos precedentes, son los que sustentan la acción de indemnización de perjuicios que deducen los demandantes don Jorge Tiburcio Cáceres Garín, don Manuel Jesús Pinochet Salazar, don Luis Alberto Silva Mellado, don Roberto Enrique Pozo Riveros, don Manuel René Parada Saldías, don Pedro Alejandro Muñoz Miranda y don Germán Luis Parra Mardones, en contra del



Fisco de Chile, a raíz de los daños y perjuicios sufridos, por sus repentinos, forzados e injustificados secuestros, torturas, tormentos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por agentes del Estado, hechos que caben dentro de la calificación de crímenes de lesa humanidad y que constituyen, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre derechos humanos.

**UNDECIMO.-** Que, el señalado informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, como a su turno la Ley N° 19.123, en cuanto crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación estableciendo que como servicio descentralizado le corresponderá promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18, remitiéndose luego al artículo 17, norma que se remite a la individualización de las personas que se realiza en el volumen segundo del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se desprende con claridad que el Estado reconoció la calidad de víctimas de violación a los Derechos Humanos o de violencia política a don Jorge Tiburcio Cáceres Garín, don Manuel Jesús Pinochet Salazar, don Luis Alberto Silva Mellado, don Roberto Enrique Pozo Riveros, don Manuel René Parada Saldías, don Pedro Alejandro Muñoz Miranda y don Germán Luis Parra Mardones, según da cuenta el certificado individualizado en el motivo Quinto.

**DUODECIMO.-** Que, de lo reseñado en los motivos precedentes ha quedado establecida la responsabilidad del Estado en los casos en análisis, resultando necesario consignar que en estos autos los actores han accionado de indemnización de perjuicios pretendiendo obtener el resarcimiento de los daños morales sufridos y ocasionados por y a consecuencia del actuar de agentes del Estado en los secuestros, torturas, tormentos y tratos crueles, inhumanos y degradantes de los afectados don Jorge Tiburcio Cáceres Garín, don Manuel Jesús Pinochet Salazar, don Luis Alberto Silva Mellado, don Roberto Enrique Pozo Riveros, don Manuel René Parada Saldías, don Pedro Alejandro Muñoz Miranda y don Germán Luis Parra Mardones,.

**DECIMO TERCERO.-** Que, solicitando el rechazo de la demanda deducida de contrario el Fisco de Chile ha interpuesto la excepción de improcedencia de la indemnización por haber sido preteridos legalmente los demandantes, fundado en que los actores ya han sido indemnizados en conformidad a la Ley 19.123, en los términos analizados en el motivo Segundo del presente fallo.

**DECIMO CUARTO.-** Que, atendida la naturaleza de la reparación integral establecida en la Ley 19.123 y sus modificaciones, otorgada en forma voluntaria por el Estado de Chile en el marco de cumplimiento de tratados internacionales ratificados por Chile, y que en ella misma establece que los beneficios por ella otorgados no son



incompatibles con otras reparaciones, siempre reconociendo el principio de reparación integral que sostiene el ordenamiento regulatorio internacional de los Derechos Humanos, no resulta suficiente en modo alguno para fundamentar una excepción en los términos como lo ha hecho la demandada. Así, es necesario precisar que la normativa invocada por el Estado, que solo establece pensiones y bonos asistenciales, no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que en esta causa se persigue, (artículo 24) sin que ella haya sido otorgada para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los Derechos Humanos, tratándose de distintas formas de reparación, no importando en caso alguno la renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare la procedencia de una indemnización total por daño moral, por los medios que autoriza el ordenamiento jurídico. Que, por lo demás, a juicio de esta sentenciadora, y a mayor abundamiento específicamente en el caso de autos, en cuanto a los demandados don Jorge Tiburcio Cáceres Garín, don Manuel Jesús Pinochet Salazar, don Luis Alberto Silva Mellado, don Roberto Enrique Pozo Riveros, don Manuel René Parada Saldías, don Pedro Alejandro Muñoz Miranda y don Germán Luis Parra Mardones, en sus calidades de víctimas directas de violaciones a los Derechos Humanos, sin perjuicio de haber sido beneficiarios de una pensión mensual de reparación conforme a la Ley 19.123, cuyo establecimiento tuvo el propósito de “desagravio, satisfacción completa de la ofensa, daño o injuria”, sí resulta procedente que sean resarcidos del evidente daño moral que en diversas dimensiones han padecido y encontrándose acreditado en autos la perpetración de los delitos de secuestro, torturas, tormentos y tratos crueles, inhumanos y degradantes, en sus personas, así como la participación en el mismo de agentes determinados e individualizados del Estado en sus calidades de Garantes de la seguridad pública, dependientes del Estado de Chile, existe por ende el daño moral comentado, el cual como se dijo, no solo debe ser reparado por los otros beneficios sociales contemplados en la Ley 19.123, sino que, también debe ser reparado y regulado prudencialmente de acuerdo a los criterios imperantes en nuestro ordenamiento jurídico y el principio de equidad. Así, acorde con lo razonado anteriormente, resulta procedente rechazar la excepción opuesta por el Fisco de Chile.

**DECIMO QUINTO.-** Que, en segundo término, el Fisco de Chile ha deducido la excepción de prescripción extintiva de la acción intentada, ello conforme lo establecido en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación a lo dispuesto en el artículo 2.497, en los términos latamente expuestos en el motivo Segundo de esta sentencia,



sosteniendo que los hechos ocurrieron entre los meses de septiembre de 1973 y abril de 1985 y aun entendiendo suspendido el plazo de prescripción hasta la restitución de la democracia, 11 de Marzo de 1990, a la fecha de notificación de la demanda, 20 de diciembre de 2018, ha transcurrido en exceso el plazo que establece el artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, opone la prescripción extintiva de cinco años contemplado para las acciones y derechos por el artículo 2.515, en relación al artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la fecha de notificación de la demanda ya referida, transcurrió con creces el plazo establecido en el artículo 2.515.

**DECIMO SEXTO.-** Que, a efectos del debido análisis de la excepción en comento, es necesario tener presente que el fundamento jurídico de la acción deducida en autos lo sitúa los actores en la responsabilidad del Estado por el daño moral en el Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, en razón del hecho propio del Estado al haber actuado como órgano, cometiendo un ilícito a través de sus agentes, y estableciendo como autores del mismo a personal del Ejército y Armada de Chile, a efectivos de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile y agentes de la Central Nacional de Informaciones, en servicio al momento de los hechos y que como se señalare en los motivos precedentes, estos mismos hechos que sustentan la acción de indemnización de perjuicios que deducen los demandantes en contra del Fisco de Chile, caben dentro de la calificación de crímenes de lesa humanidad y que constituyen, por ende una violación grave a las normas internacionales sobre derechos humanos, y que, a través de los elementos probatorios ya ponderados, permiten desprender con claridad que el Estado reconoció la calidad de víctimas de violación a los Derechos Humanos o de violencia política a don Jorge Tiburcio Cáceres Garín, don Manuel Jesús Pinochet Salazar, don Luis Alberto Silva Mellado, don Roberto Enrique Pozo Riveros, don Manuel René Parada Saldías, don Pedro Alejandro Muñoz Miranda y don Germán Luis Parra Mardones. En consecuencia, se demuestra que se está en presencia de afectados por delitos de lesa humanidad, de manera que el derecho de las víctimas de este tipo de ilícitos encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y normativa de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en nuestra carta fundamental, en la especie inciso 2° de los artículos 5 y 6 de la Constitución Política de la República.



**DECIMO SEPTIMO.-** Que, sentado así lo anterior, corresponde continuar analizando la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile, haciendo presente que tratándose de delitos de lesa humanidad, su acción persecutoria es imprescriptible, más aun si tratándose en la especie de una demanda de indemnización por daño moral sustentada fehacientemente en la comisión por parte de agentes del Estado de delitos de secuestros simples, de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que necesariamente se deberá desestimar la excepción de prescripción opuesta por la demandada. Que, de este modo, dada la especial naturaleza de los ilícitos cometidos, lo que surge de los hechos que se han establecido, no controvertidos por el demandado, aparece que ellos, que son el fundamento de la demanda, constituyen crímenes de lesa humanidad y, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre Derechos Humanos, por lo que resulta improcedente declarar la prescripción de la acción indemnizatoria ejercida, como se dirá.

**DECIMO OCTAVO.-** Que, en efecto, en la clase de delitos por los cuales se sustenta la acción indemnizatoria reclamada, y en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no es coherente entender que la acción civil que de ellos deriva esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Que, a mayor abundamiento, es necesario tener asimismo presente que, pesando sobre el Estado el deber de reparar a la víctima, este deber encuentra también su consagración en el derecho interno en el sistema de responsabilidad del Estado que deriva además del artículo 3 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto dispone que la administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los



principios a que debe sujetarse es el de la responsabilidad, lo que recoge expresamente en su artículo 4. Por consiguiente, cualquier diferenciación entre ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.

**DECIMO NOVENO.-** Que, sin perjuicio de lo ya expresado, corresponde señalar que los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, de modo que estas no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, toda vez que, si se verifica un hecho ilegítimo imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esa índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. En el mismo sentido la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones. En este sentido autores como Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas” en Anuario de derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000 ha señalado que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del mismo.

**VIGESIMO.** - Que, en consecuencia, solo corresponde como se señaló, desestimar la excepción de prescripción opuesta por el demandado de autos, tanto la excepción formulada por vía principal como aquella formulada por vía subsidiaria.

**VIGÉSIMO PRIMERO.-** Que, encontrándose establecida la comisión de hechos ilícitos por agentes del Estado, de la cual surge la responsabilidad del Estado conforme a lo establecido en el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental en cuanto prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la constitución y a las leyes, y son responsables de sus actos de acuerdo a la ley, como asimismo a lo establecido en el artículo 4 de la ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado al disponer que “*El Estado será responsable de los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que las hubiere realizado*”. Cabe señalar que el citado principio se ve reiterado en el artículo 44 del mismo texto legal. Al efecto, de las normas citadas en el párrafo precedente, solo es dable



concluir que tanto el constituyente como el legislador ha expresado en forma inequívoca su intención de que el Estado se haga responsable del actuar de sus agentes, cuando este ocasiona un daño al administrado, responsabilidad que por su naturaleza cae en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.

**VIGESIMO SEGUNDO.-** Que, necesario resulta a continuación, el análisis del daño cuyo resarcimiento se pretende por los actores, en cuanto presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios que se intenta en esta causa. Al efecto es necesario precisar que se trata en la especie del resarcimiento del daño moral, que requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, recordando que el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física, y/o en los sentimientos o afectos de una persona. El daño moral, es en consecuencia, toda lesión causada culpable o dolosamente que signifique molestias, perturbación en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona e imputable a otra, daño que no es de naturaleza propiamente económica y que no implica, un deterioro o menoscabo real y directo en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa, sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva.

**VIGESIMO TERCERO.-** Que, atendidas las particularidades reseñadas en el motivo precedente, es dable desprender que la comprobación de la inobservancia o agravio del derecho subjetivo envuelve al mismo tiempo, la prueba de la efectividad del daño moral, de suerte que comprobada la existencia de un delito, como es el caso de autos, forzoso es concluir que se ha producido un daño y que debe ser reparado, toda vez que no podría ser de otra manera, en tanto, materialmente resulta extremadamente difícil, medir con exactitud la intensidad con que las lesiones han afectado a la víctimas, en este caso los actores, por la naturaleza del perjuicio provocado. Por ello, la naturaleza del dolor no hace indispensable la prueba del mismo, sino que se trata de un hecho evidente que las lesiones físicas y mentales sentidas, experimentadas por el sujeto causan un sufrimiento, que no requiere de evidencia, pero que en todo caso debe ser indemnizado por quien los ocasionó, tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos y debiendo hacerse una apreciación equitativa y razonable por el tribunal.

**VIGESIMO CUARTO.-** Que, en el caso de autos, en relación al daño sufrido por los actores don Jorge Tiburcio Cáceres Garín, don Manuel Jesús Pinochet Salazar, don Luis Alberto Silva Mellado, don



Roberto Enrique Pozo Riveros, don Manuel René Parada Saldías, don Pedro Alejandro Muñoz Miranda y don Germán Luis Parra Mardones, en sus calidades de víctimas directas de violaciones a los Derechos Humanos, quienes a la fecha de sus detenciones, secuestros, torturas, tormentos y tratos crueles, inhumanos y degradantes, acontecidos respectivamente entre el 11 de septiembre de 1973 al 15 de octubre de 1974; entre el 12 de septiembre de 1974 al 04 de octubre de 1974; entre el 12 de agosto de 1983 al 14 de agosto de 1983; entre el 01 de septiembre de 1974 al 17 de septiembre de 1974 y desde el 22 de septiembre de 1974 al 13 de febrero de 1975; entre el 11 de septiembre de 1973 al 25 de octubre de 1973 y entre el 03 al 06 de septiembre del 1984; entre el 15 de octubre de 1973 al 20 de noviembre de 1973, y; entre el 09 de abril de 1980 al 09 de abril de 1985; respectivamente, eran estudiantes o trabajadores, integrantes de familias, con expectativas familiares, laborales, profesionales y sociales, siendo detenidos, secuestrados, torturados y sometidos a vejámenes, tormentos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, por efectivos del Ejército y Marina de las Fuerzas Armadas de Chile, efectivos de Carabineros de Chile, efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile y agentes de la Central Nacional de Informaciones, es dable presumir que les produjo un gran dolor, angustia, aflicción, inseguridad y natural temor al momento de producirse los hechos y que innegablemente se ha prolongado a lo largo de sus vidas, alterando así de un modo violento sus proyectos de vida, mas aun considerando las circunstancias particulares padecidas por cada uno de los actores, quienes permanecieron en cautiverio por tiempos más o menos prolongados, por casi inclusive cinco años de sus vidas como el caso del demandante don Germán Luis Parra Morales, varios de los demandantes detenidos y torturados en más de una oportunidad, varios de ellos también acusados y sentenciados al margen de todo debido proceso, separados de sus familias y separado hasta del hijo recién nacido como en el caso del actor Manuel René Parada Saldías, quien hasta la fecha permanece en la búsqueda de rastros de su destino, despojados de sus trabajos y estigmatizados socialmente, prisionero en diversos centros de detenciones, quienes se vieron amenazados vitalmente y anulados completamente, tanto del sujeto, de su cuerpo y de su relación con el mundo por medio del sufrimiento extremo y el quiebre de su proyecto vital y de sus creencias en sí mismo, conclusión que se ve inequívocamente corroborada y que se infiere necesariamente por los testimonios analizados en el motivo Sexto, que dan cuenta de los padecimientos sufridos, las alteraciones de carácter, de salud, temores y angustias permanentes sufridos por durante años, y constatado por



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CMNXXFFXRQT

profesionales de la salud, que se prolongaron desde la época de los hechos y que tuvo consecuencias graves y crónicas en la salud de los demandantes que sirven de sustento a la presente demanda, circunstancias que en los informes emitidos acerca de las secuelas de las víctimas y de los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, revelan los daños experimentados a lo largo de los años por los demandantes a consecuencia de los ilícitos que motiva la presente causa. Cabe destacar que, por la naturaleza de los ilícitos que afectaron a los demandantes, las circunstancias de los mismos, los acontecimientos sociales históricos de nuestro país que han permitido en algunas casos, más de cuarenta años después, conocer algunas circunstancias de las desapariciones y la ubicación de los restos mortales de algunas de las víctimas, permiten desprender en forma inequívoca la angustia permanente seguidas de las referidas experiencias traumáticas límites, constante que en mayor o menor medida, les ha acompañado durante el devenir de sus vidas.

**VIGÉSIMO QUINTO.-** Que, encontrándose acreditado que los actores sufrieron una lesión o detrimento en sus personas, en el desarrollo de la misma, lo que es dable presumir desde las máximas de experiencia, y la naturaleza de los hechos acreditados en autos, les afectó su integridad psicológica, física, su libertad, sus afectos, estabilidad y unidad familiar, esto es, en general, los atributos o cualidades morales de sus personas, con las consiguientes repercusiones en la normalidad de su existencia, necesario resulta acceder a la demanda de indemnización del daño moral experimentados por los actores, el que atendido los antecedentes que obran en el proceso y que han sido reseñados en los motivos anteriores, se accederá a la demanda de autos, teniendo presente los criterios de coherencia en la interpretación de los antecedentes, fijando a título de indemnización de perjuicios por el daño alegado prudencialmente la suma única y total de **\$70.000.000.-** (setenta millones de pesos) para **cada uno** de los actores don Jorge Tiburcio Cáceres Garín, don Manuel Jesús Pinochet Salazar, don Luis Alberto Silva Mellado, don Roberto Enrique Pozo Riveros y don Pedro Alejandro Muñoz Miranda; y la suma **de \$80.000.000.-** (ochenta millones de pesos) para don Manuel René Parada Saldías y don Germán Luis Parra Mardones, en atención a las especiales circunstancias sufridas por el primero y la extensión de tiempo en que permaneció privado de libertad el segundo.

**VIGESIMO SEXTO.-** Que, debiendo pagar la demandada la suma de dinero ordenada pagar en el motivo precedente, ello deberá efectuarse debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que experimente Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de la



presente sentencia y aquella en que efectivamente se realice el pago, más intereses corrientes para operaciones reajustables, según liquidación que se practicará en su oportunidad.

Y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, y siguientes del Código Civil; 144, 159, 254 y siguientes, 342, 346 N° 3, 384, 430, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Ley 19.123; artículo 5 y 6 de la Constitución Política de la República, se declara:

**I.-** Que, se rechazan las excepciones opuestas por el Fisco de Chile, de improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante y de prescripción extintiva de la acción civil de indemnización de perjuicios, en ambas excepciones opuestas, de acuerdo a lo consignado en los motivos Décimo Cuarto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo, respectivamente, del presente fallo.

**II.-** Que se acoge, con costas, la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta a folio 1, en cuanto la demandada deberá pagar **a cada uno de los actores** don Jorge Tiburcio Cáceres Garín, don Manuel Jesús Pinochet Salazar, don Luis Alberto Silva Mellado, don Roberto Enrique Pozo Riveros y don Pedro Alejandro Muñoz Miranda, la suma de única y total de **\$70.000.000.-** (setenta millones de pesos); y la suma **de \$80.000.000.-** (ochenta millones de pesos) para los actores don Manuel René Parada Saldías y don Germán Luis Parra Mardones, en atención a las especiales circunstancias sufridas por el primero y la extensión de tiempo en que permaneció privado de libertad el segundo, todo por concepto de daño moral, con reajustes e intereses en la forma indicada en el motivo Vigésimo Sexto.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por doña Jacqueline Dunlop Echavarría, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, ocho de Junio de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CMNXXFFXRQT